

Inflación en Argentina y limitaciones del “modelo” kirchnerista

Martin Trombetta

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Económicas

martintrombetta@gmail.com

Introducción

Durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), la economía argentina atravesó un proceso de crecimiento muy pronunciado, inusitado en la historia reciente de nuestro país. Con tasas de crecimiento anual en torno al 8%, la economía parecía alejarse de los tiempos de profundas y duraderas recesiones, como las de las décadas del '70 y '80, donde todos los indicadores sociales empeoraron profundamente, en una tendencia que continuó hasta hace unos pocos años. La política económica tomó un giro fuertemente expansivo, tanto en el frente fiscal como en el monetario.

A comienzos de 2007, esta estrategia de crecimiento empezó a mostrar su primera fuerte limitación: la inflación. La tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor se disparó rápidamente y comenzó a adoptar valores superiores al 20%, convirtiendo a Argentina en el segundo país con mayor inflación en el mundo. Inicialmente, la respuesta del gobierno a este problema consistió en intentar ocultarlo interviniendo políticamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que quedó bajo control de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. El organismo publica, desde entonces, un índice de precios al consumidor adulterado que no puede ser tomado como fuente confiable para medir la inflación. Posteriormente, muchos funcionarios oficialistas declararon públicamente que la inflación no es un problema para la sociedad en términos distributivos.

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, indagamos las causas del proceso infla-

cionario que la Argentina atraviesa en estos años, para concluir que se trata de un proceso de inflación de origen real, motivado por la permanente expansión de la demanda agregada a partir de políticas fiscales y monetarias procíclicas. En segundo lugar, argumentamos que la inflación es, efectivamente, la principal limitación del llamado “modelo” kirchnerista y que no solo produce una redistribución regresiva del ingreso en contra de los trabajadores sino que da cuenta de la condición de atraso que pesa sobre la economía local y que no ha sido revertida en los últimos años a pesar del crecimiento del producto.

La crisis de 2001-2002 y el comienzo de la “era K”

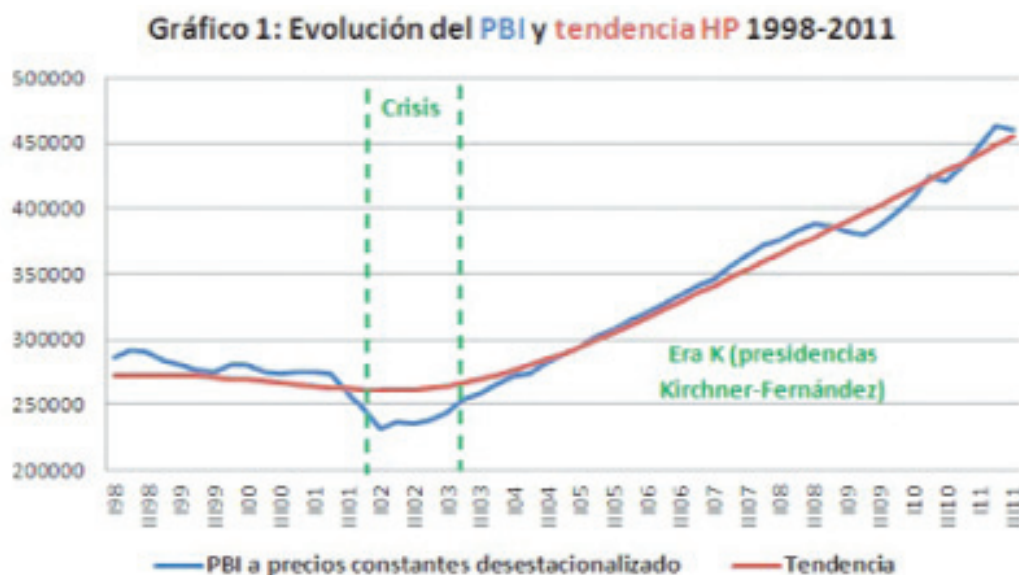
En el año comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, Argentina atravesó una de las más profundas crisis económicas de la historia del continente. En ese lapso, el PBI argentino cayó 11% en términos reales, la mayor caída anual desde que existen en nuestro país las cuentas nacionales. También las tasas de desocupación, pobreza e indigencia alcanzaron récords históricos en 2002: 21,5%, 57,5% y 27,5% respectivamente. Esta crisis económica se transmutó en una igualmente profunda crisis política, que arrasó con el gobierno de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001. Tras un fallido intento presidencial de Adolfo Rodríguez Saa, que no duró siquiera dos semanas en el puesto, la presidencia de la nación quedó en manos de Eduardo Duhalde el 2 de enero de 2002.

La crisis económica se profundizó a lo largo de todo 2002 y dio lugar a un clima de fuerte movilización y protesta. Los numerosos episodios de represión policial y militar de manifestaciones (en particular, el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de ese año) debilitaron notablemente al gobierno, que se vio obligado a llamar a elecciones a comienzos de 2003. El 25 de mayo de ese año, asumió la presidencia Néstor Kirchner, candidato impulsado por el propio Duhalde, en un proceso electoral en el que los partidos políticos tradicionales de la burguesía argentina (el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical) se partieron en numerosas listas, producto de su descomposición política originada en la crisis en curso. Kirchner asumió luego de que Carlos Menem, que lo había superado por un pequeño margen en la primera jornada electoral, optase por no presentarse al ballottage. Así comenzaba la “era K”, que continúa hasta nuestros días, luego de la elección de Cristina Fernández (esposa de Kirchner) en 2007 y de su reelección en 2011.

Uno de los objetivos políticos planteados abiertamente por el kirchnerismo desde 2003 hasta la fecha es la reconstrucción de la burguesía nacional. Este proceso, en realidad, ya estaba en marcha cuando Kirchner asumió, puesto que la pesificación de los depósitos y créditos bancarios de finales de 2001, si bien desencadenó una profunda crisis económica que produjo la quiebra de numerosos bancos y grandes empresas, permitió al mismo tiempo la recuperación de la tasa de ganancia de una fracción considerable de los grandes capitales locales, de modo que el proceso de acumulación de capital comenzaría una nueva fase ascendente en 2003. Sin embargo, es claro también que el kirchnerismo orientó la política económica precisamente en este sentido, con el fin de revivir a una economía seriamente deprimida. En particular, el gobierno implementó una política fiscal fuertemente expansiva, cuyo aspecto más saliente es el nutrido caudal de sub-

sidios a empresas privadas. Una vez más, el objetivo de esta política consistía en garantizar el aumento de la tasa de ganancia de aquellos capitales que estaban seriamente dañados por la crisis de 2001-2002, en aras de incentivar la inversión privada.

En una economía con hiperabundancia de recursos ociosos, la expansión fiscal dio resultado y el producto entró en un ciclo de crecimiento. El gráfico 1 muestra claramente cómo, de un período de tendencia casi constante entre 1998 y 2003, se pasó a una fase de clara tendencia creciente, con pequeños ciclos recesivos en 2009 y finales de 2010. Dado que la Argentina posee una estructura tributaria fuertemente procíclica (basada, principalmente, en impuestos al consumo y, en particular, en el Impuesto al Valor Agregado), el crecimiento del producto convalidó la expansión fiscal y comenzó un proceso de crecimiento con superávit fiscal que se mantendría hasta, por lo menos, comienzos de 2008.



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC. El PBI está expresado en millones de pesos a precios de 1993. La tendencia está calculada con el filtro de Hodrick y Prescott. La desestacionalización del PBI es realizada con el procedimiento X12.

La inversión, por su parte, se recuperó hasta alcanzar una participación en el producto del orden del 22%, que no es otra cosa que el promedio correspondiente a la década de los '90. En otras palabras, este proceso de crecimiento apenas logró desandar la caída de fines de los '90, pero no logró llevar a la inversión por encima de sus valores medios históricos. Aquí se observa, precisamente, el carácter históricamente limitado del kirchnerismo: no produjo ninguna transformación cualitativa de la estructura productiva argentina, que mantuvo su sesgo extractivo y su fuerte dependencia de los grandes capitales transnacionales. Antes bien, el proyecto político del kirchnerismo se limitó a la aplicación de políticas públicas de corte fuertemente expansivo, que darían buenos resultados en una economía profundamente deprimida por la crisis económica más

acentuada de su historia. La situación cambiaría unos años más tarde.

Política económica y discurso político

Para analizar la evolución de la política fiscal y monetaria durante el kirchnerismo, tomamos como indicadores respectivos el gasto público y la oferta monetaria líquida (conocida habitualmente como M1, que no es otra cosa que la suma entre efectivo en manos del público y depósitos bancarios de fácil acceso). En ambos casos, es importante analizar la participación de estas variables en el PBI (real y nominal, respectivamente) para tener una idea de su evolución en términos relativos.



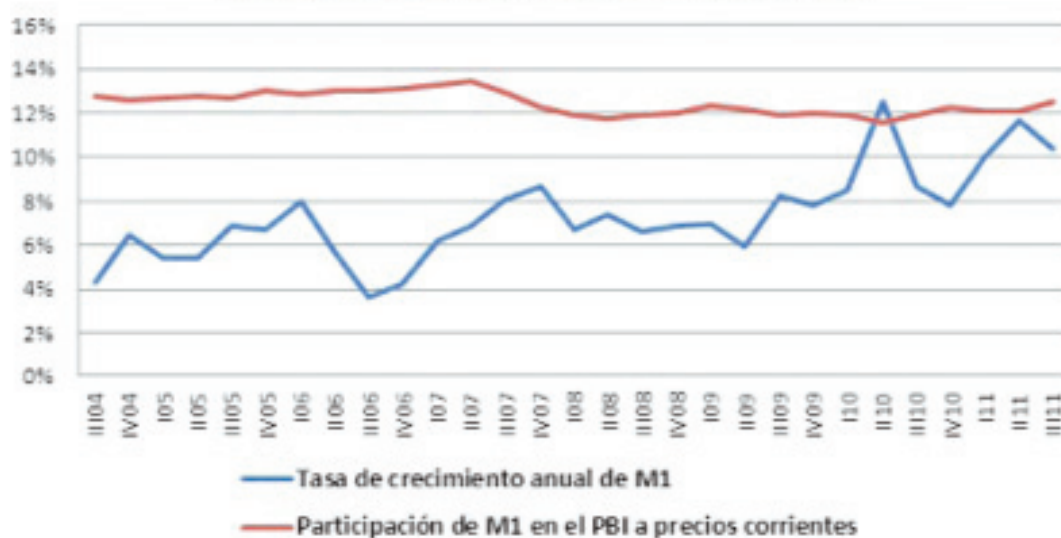
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

El gráfico 2 señala dos características importantes del ciclo. En primer lugar, la tasa de crecimiento anual del gasto público aumenta tendencialmente a lo largo del período 2004-2011, con un pico de 12,5% en el segundo trimestre de 2010. El promedio de la serie es de 7,5%, casi igual a la tasa de crecimiento promedio del PBI durante el mismo lapso. Vemos entonces que la política fiscal del kirchnerismo tiene un carácter fuertemente expansivo y procíclico. Sin embargo, también observamos que la participación porcentual del gasto público en el producto casi no varió, sino que se mantuvo muy cerca de 12% durante todo el período analizado. En otras palabras, el gasto aumentó año a año a la par del producto, sin que su peso relativo en la composición de este último se altere significativamente. En ese sentido, la política fiscal expansiva logró su objetivo.

Otro hecho a destacar es el sesgo expansivo en años electorales: tanto en 2007 como en 2011 el gasto creció más rápidamente de lo que lo había hecho en años anteriores. En

2011, en particular, el gasto llegó a crecer más rápido que el producto y notablemente más rápido de lo que lo había hecho en 2007. Es claro que el kirchnerismo enfrentaba una situación compleja tanto en el plano económico como en el político, ya que el vertiginoso proceso inflacionario que la economía atravesaba en ese momento, sumado a cierto grado de inestabilidad financiera motivado por la salida de capitales y la dolarización de las carteras, hacía más difícil que los aumentos del gasto se trasladaran a aumentos del producto. El kirchnerismo debió recurrir a todo su arsenal de subsidios (que incluye tanto transferencias monetarias a los trabajadores como subsidios directos a capitalistas) para garantizar un resultado electoral que, a priori, podía parecer esquivo.

Gráfico 3: Política monetaria 2004-2011



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

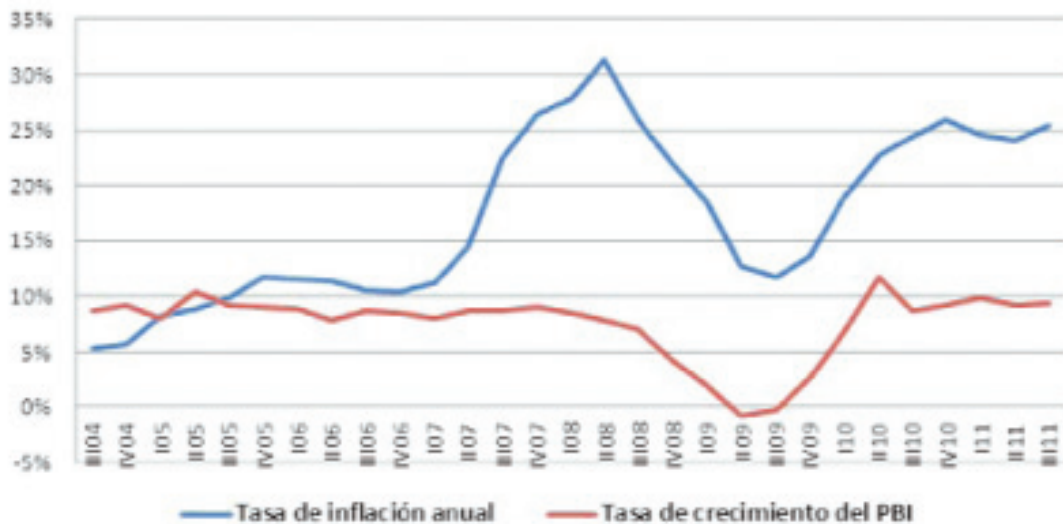
En la política monetaria el patrón expansivo es igualmente claro. La tasa de crecimiento anual de M1 osciló en torno a un 7,3% anual (valor muy alto de por sí) y se aceleró marcadamente tanto en 2007 como en 2010-2011. Una vez más, encontramos que la participación de la oferta monetaria en el producto es aproximadamente constante, ya que la correlación entre M1 y PBI es alta.

Esta política económica fuertemente expansiva produjo aumentos sostenidos del producto, particularmente entre 2003 y 2007 y entre 2010 y 2011. El gobierno permanentemente buscó capitalizar los réditos políticos de esta fase de crecimiento económico (apodada “el modelo” desde la esfera gubernamental): no hay discurso oficial que no contenga una mención explícita de estos y otros indicadores que denotan la tendencia creciente del PBI argentino entre 2003 y 2011. Sin embargo, este crecimiento tirado por demanda se revela ilusorio cuando se analiza el marco macroeconómico de conjunto; en particular, la limitación más importante de este proceso se hizo manifiesta ya en 2006, año en que la tasa de inflación anual rompió la barrera de los dos dígitos.

Llega la inflación al “modelo” kirchnerista

En 2006, la continua expansión económica desató un proceso inflacionario que continúa hasta nuestros días. Se trata de la consecuencia natural de la política económica procíclica: mientras la capacidad instalada se encontrara marcadamente subutilizada (como ocurrió entre 2004 y 2005), el mercado podría ajustar por cantidad y convalidar la expansión económica; sin embargo, una vez que la recuperación económica redujo la tasa de desempleo a cifras menos escandalosas, la clase obrera recuperó cierto poder de negociación salarial (antes erosionado por la crisis de 2001-2002) y, al mismo tiempo, muchos sectores productivos entraron en cuellos de botella. Esto hizo inevitable el ajuste por precios: la expansión económica continuó, a expensas de una mayor inflación. Los capitales en uso aumentaron su escala productiva pero también aumentaron los precios de mercado de sus mercancías.

Gráfico 4: Crecimiento e inflación



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Elypsis. La tasa de inflación se construye a partir de los índices de precios al consumidor de seis provincias argentinas cuyos institutos de estadísticas no sufrieron intervención oficial.

Entre 2004 y 2006, la correlación entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de inflación anual (la tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor) es muy baja e, incluso, negativa. Sin embargo, a partir de 2007, esta asciende a más de 60%. Una simple inspección del gráfico 4 revela que estas series tienen un comportamiento casi idéntico en este último lapso; de hecho, la inflación anual se mantuvo siempre por encima del 20%, excepto en 2009, año de desaceleración económica causada por la profundización de la crisis económica internacional. Esta tasa de inflación anual ubica a Argentina en el segundo lugar del ranking mundial de inflación anual promedio entre 2007 y 2011, solo superada por Venezuela y seguida por Congo, Etiopía y Santo Tomás y Príncipe. En el 83% de los países del mundo, ese promedio fue inferior al 10%.¹ Esta

abrumadora mayoría comprende más de 150 países, incluyendo representantes de los cinco continentes y de todas las franjas de ingreso per cápita.

Consideramos que esta observación alcanza de por sí para descartar las teorías que asignan a la inflación un origen externo (“inflación importada”), frecuentes en el seno kirchnerista pero también en buena parte de la izquierda argentina. Es claro que no existe actualmente un proceso de inflación mundial (al menos no de orden superior a 20% anual, de hecho, la media mundial es de 6,5%), de manera que la inflación argentina necesariamente debe obedecer a las especificidades del proceso de acumulación de capital que se da en este país.²

Este problema fue rápidamente comprendido por el gobierno: sin embargo, la burguesía local jamás pudo encontrar una salida al mismo. De hecho, la respuesta del gobierno fue particularmente desprolija: a comienzos de 2007, el gobierno intervino políticamente el INDEC y toda la estructura dedicada a producir índices de precios pasó a estar controlada por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. El Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue el encargado de llevar adelante una política de ataque sistemático a los trabajadores del organismo, que incluyó despidos, golpizas, intimidaciones y amenazas hasta que los guarismos fueran modificados. Desde entonces, el INDEC produce una serie de inflación que sistemáticamente ubica a este indicador en torno al 9% anual. No conocemos un solo texto político o académico que considere confiables estos datos.³ En otras palabras, la respuesta del gobierno al problema de la inflación fue sencillamente negar su existencia en un ejercicio casi orwelliano. El rumbo de la política económica no fue alterado en lo más mínimo.

Inflación y lucha de clases

En 2011, Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta por una mayoría abrumadora de votos en un año en que la tasa de inflación superó el 25%. Para ese entonces, la inflación ya se había convertido en uno de los principales problemas de la agenda política y económica nacional e incluso muchos funcionarios públicos e intelectuales oficialistas llegaron a admitir públicamente que es superior a lo publicado por el INDEC. Asimismo, numerosas declaraciones buscan asignar un rol “pasivo” o “neutral” a la inflación, incluso dando a entender que, de existir, esta sería un problema que iría solamente en desmedro del consumo de los capitalistas o de los trabajadores de mayores salarios.

Esta afirmación es absolutamente falsa y encubre el carácter profundamente regresivo del ciclo de crecimiento que nuestro país atraviesa en la actualidad. La inflación de demanda empuja a los capitales a elevar la escala productiva pero también obliga a que esas mercancías adicionales se realicen a un precio mayor en el mercado, de manera que la tasa de ganancia media no se reduzca. Sin embargo, dicho proceso no ocurre de manera pareja en todas las ramas productivas; esto es, en pleno proceso inflacionario, algunos capitales se valorizarán por encima de la tasa de ganancia media de su rama y otros lo harán por debajo de la misma. En otras palabras, unos saldrán beneficiados y otros perjudicados. El correlato de esto es lo que ocurre con los miembros de la clase obrera: aquellos que tengan un elevado poder de negociación salarial podrán acceder a aumentos nominales de salarios que compensarán la inflación y mantendrán su poder

adquisitivo constante, mientras que otros no. Para algunos trabajadores, la canasta de consumo en tanto conjunto de valores de uso crecerá, mientras que para otros se reducirá.

Los trabajadores perjudicados serán entonces aquellos cuyo poder de negociación salarial sea menor, lo cual en nuestro país es típico de los trabajadores no registrados o en diversas situaciones de precariedad laboral, lo que habitualmente se denomina “trabajadores informales”. El porcentaje de trabajadores en esta categoría se ha reducido ligeramente entre 2003 y 2011, pero continúa por encima del 50%. Esto quiere decir que, para la mitad de la clase obrera argentina, la inflación es equivalente a una reducción sistemática en su salario real (el valor de mercado de su salario en términos de valores de uso), que corresponde a un aumento en la masa de ganancia apropiada por aquellos capitales con mayor poder de mercado.

Sin embargo, es necesario ir más allá, ya que la inflación de demanda no es simplemente un proceso de redistribución regresiva del ingreso. Por el contrario, se trata de un fenómeno que revela el carácter históricamente atrasado y dependiente de la economía de un país periférico como Argentina. La característica distintiva de este tipo de países es que el capital no alcanza una productividad similar a la productividad media del capital internacional. En otras palabras, las empresas que producen en Argentina lo hacen con una productividad mucho menor a la de las empresas que operan en los países centrales (o bien las multinacionales, cuyo proceso de acumulación individual de capital las ha llevado a superar las barreras nacionales). En ese sentido, no son capitales socialmente viables. Sin embargo, subsisten y se valorizan a una tasa de ganancia aceptable gracias a los subsidios públicos que redistribuyen la renta de la tierra entre las diferentes ramas productivas.

Cuando las políticas económicas del gobierno proveen incentivos a aumentar la escala productiva, estos capitales pequeños y raquíticos pueden hacerlo, mientras esto implique utilizar capacidad productiva previamente ociosa. Durante ese proceso, la escala productiva aumenta y los precios evolucionan en torno a la tasa de inflación internacional, que siempre es la cota inferior para la tasa de inflación de una economía periférica. Eso ocurrió en Argentina entre 2003 y 2005. Sin embargo, una vez que la utilización de la capacidad instalada se acerca a su máximo, aumentar la escala productiva implica la necesidad de una mayor inversión de capital dinerario. La burguesía local solo está dispuesta a correr ese riesgo si puede garantizar el sostenimiento de su tasa de ganancia media mediante el aumento de precios. A su vez, como explicamos anteriormente, el aumento de la escala productiva reduce el desempleo y fortalece así el poder de negociación de una parte de los trabajadores (en particular, el de los trabajadores formales), lo cual produce aumentos nominales de salarios y eleva los costos de producción. El mantenimiento de la tasa media de ganancia exige entonces un nuevo aumento de los precios.

La inflación de demanda es entonces la expresión del carácter atrasado de una economía donde la demanda agregada crece sistemáticamente, motorizada por la expansión fiscal y monetaria. La incapacidad del capital local de aumentar su productividad hasta los niveles medios internacionales lo vuelve incapaz de elevar la escala productiva a un nivel internacionalmente aceptable (es decir, al PBI per cápita de Estados Unidos o Europa occidental, por ejemplo). Cualquier “tirón” proveniente de las políticas públicas

es capaz de generar una expansión real, pero tal cosa solo es posible si los precios aumentan a la par del producto. Eso es exactamente lo que ocurrió en Argentina a partir de 2006.

La consecuencia de este “modelo” es un aumento en la brecha de desigualdad social entre capitalistas y trabajadores, así como una profundización del proceso de diferenciación de la clase obrera, que ahora se fragmenta entre aquellos trabajadores que obtienen aumentos salariales por encima de la inflación y aquellos que no. El proceso de acumulación de capital en Argentina choca permanentemente contra sus limitaciones estructurales y solo es capaz de avanzar sobre la base de una mayor pauperización de los sectores más débiles de la clase obrera.

Conclusión

Las condiciones de vida de la clase obrera argentina, luego de una sustancial mejora en el período comprendido entre 2003 y 2008, comienzan a empeorar nuevamente en 2009. Una vez más, la manipulación política de las estadísticas públicas nos impide desarrollar un análisis preciso, dado que la subestimación de la inflación conduce a una subestimación similar de la pobreza. De todos modos, existe cierto grado de consenso en que ésta aumentó entre 2009 y 2011. Este fenómeno es una consecuencia directa del proceso inflacionario ya que, como mencionamos en las secciones anteriores, la economía no se encuentra en un período de recesión sino de expansión. La inflación, en tanto expresión concreta del carácter atrasado de la economía argentina, se erige como la barrera objetiva que impide el progreso en las condiciones de realización social de la clase obrera como sujeto histórico.

El kirchnerismo se muestra así en su forma más pura: no es otra cosa que la expresión política más acabada de las burguesías pequeñas y raquíticas de los países periféricos, cuyos capitales no son socialmente productivos y por lo tanto no son capaces de alcanzar una escala productiva socialmente aceptable. Es por este motivo que Argentina no integra el grupo de países de PBI per cápita alto (“países ricos”) sino que se ubica en el de PBI per cápita intermedio. El proceso de acumulación de capital avanza en Argentina motorizado por las políticas públicas que sostienen la tasa de ganancia media del capital local en un nivel aceptable a través de la redistribución de la renta de la tierra. El kirchnerismo es capaz de llevar adelante tales políticas públicas con eficacia, pero no es capaz de superar las limitaciones estructurales del proceso de acumulación de capital en su forma local.

Es importante notar que ni siquiera en sus momentos de apogeo político o triunfo electoral (el período 2005-2007 ó 2010-2011) el kirchnerismo fue capaz de revertir el sendero de la economía en materia inflacionaria. Aplicar políticas antiinflacionarias implicaría una de dos cosas: limitar el crecimiento de la demanda agregada o aumentar la oferta agregada. La primera opción equivaldría a reducir la inflación a expensas de frenar el crecimiento económico, es decir, postergar el desarrollo de la acumulación de capital. Esta opción no es viable en términos políticos porque el enfriamiento de la economía también acarrea un empeoramiento relativo en las condiciones de vida de la clase obrera. La segunda alternativa es atractiva pero se encuentra fuera del alcance del gobierno,

sencillamente porque no es posible elevar la inversión por encima de sus valores relativos actuales. Como notamos anteriormente, la inversión representa hoy poco más de un quinto del PBI, que es un valor cercano a la media histórica de este indicador. En otras palabras, esta no puede aumentar porque ya se encuentra cerca de su límite estructural. Aumentar la inversión es justamente lo que el kirchnerismo es incapaz de hacer, en tanto es incapaz de lograr que el pequeño y raquítrico capital local adquiera la productividad y la escala del capital medio internacional. De cualquier manera, es importante destacar que, independientemente de que esto fuera posible o no, el kirchnerismo nunca llevó adelante políticas de oferta o de sesgo productivo de ninguna clase, ya fuera porque advertía su ineficacia o porque desconfiaba de la posibilidad de obtener de ellas los réditos políticos suficientes.

El problema de la inflación no puede ser entendido simplemente como un desacierto en la estrategia económica del gobierno. Tampoco puede ser reducido en abstracto a la esfera de las “consecuencias de la crisis económica internacional”, ya que se trata de un fenómeno propio de la esfera nacional y no del común de los países subdesarrollados del mundo (ni siquiera de aquellos que exportan alimentos). Las variantes que atribuyen a la inflación un origen monetario ni siquiera merecen mayor análisis, a la luz de la alta correlación existente entre la oferta monetaria y el producto bruto interno (que debería ser nula si la inflación fuera, como la economía neoclásica acostumbra consignar, un fenómeno puramente monetario). Por el contrario, el problema de la inflación nos señala hasta dónde el “modelo” es capaz de avanzar. La necesidad de su superación abre las puertas al debate sobre la acción política de la clase obrera en los países atrasados como Argentina.

Notas

1 Cálculos realizados en base a las World Economic Outlook Databases del Fondo Monetario Internacional

2 También es importante notar que la inflación argentina no puede ser atribuida a su carácter de país exportador de alimentos, ya que otros países con exportaciones cualitativamente similares no sufren este problema, como es el caso de Uruguay y Australia, con tasas de 7,5% y 3% respectivamente.

3 Es interesante notar que muchos especialistas que comenzaron recientemente a desempeñarse como funcionarios en el Ministerio de Economía expresaban abiertamente su desconfianza de los guarismos oficiales hasta antes de asumir dichas funciones. Véase, a modo de ejemplo, CENDA (2008).

Referencias

Astarita, Rolando: *Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos*, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, Bernal, 2008

Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino: *Notas de la economía argentina*, agosto de 2008.

Iñigo Carrera, Juan Bautista: *La acumulación de capital en la Argentina*, Centro para la Investigación como Crítica Práctica, Buenos Aires, 1998

Iñigo Carrera, Juan Bautista: *La formación económica de la sociedad argentina*, Imago Mundi, Buenos Aires, 2007